



## Asamblea General

Distr. general  
28 de febrero de 2012  
Español  
Original: inglés

---

### Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### **Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones (29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)**

### **Nº 26/2011 (República Árabe Siria)**

### **Comunicación dirigida al Gobierno el 8 de abril de 2011**

**Relativa a: Muhannad Al-Hassani**

#### **El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. Muhanad Al-Hassani es un ciudadano sirio nacido en 1966. Es un abogado que representa a los activistas que luchan por la democracia en la República Árabe Siria y un defensor de los derechos humanos que participa en actividades a favor de los presos políticos. Ha formado parte de la Comisión Internacional de Juristas, y en 2010 fue galardonado con el Premio Martin Ennals de Defensa de los Derechos Humanos. El Sr. Al-Hassani también es presidente y fundador de la Organización pro Derechos Humanos de Siria (Sawasiyah), una organización declarada ilegal por el Gobierno de Siria. La organización del Sr. Al-Hassani hace un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Siria y emite periódicamente comunicados de prensa en los que critica al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, tribunal de excepción establecido en virtud de la Ley de emergencia del Estado y competente para juzgar a todas las personas, civiles o militares, independientemente de su rango o inmunidad (artículo 7 del decreto legislativo N° 47).

4. El 28 de julio de 2009, el Sr. Al-Hassani fue detenido en Damasco por agentes del servicio de inteligencia sirio. Se desconoce si se mostró al Sr. Al-Hassani un mandamiento u otra decisión de una autoridad pública que justificara su detención.

5. Según las informaciones recibidas, pocos días antes de su detención, el Sr. Al-Hassani estaba siguiendo una de las actuaciones del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Al parecer, el Sr. Al-Hassani fue agredido por un empleado del tribunal, que actuaba bajo las órdenes del fiscal jefe. El empleado confiscó las notas del Sr. Al-Hassani y destruyó sus demás documentos. Al día siguiente, el Sr. Al-Hassani recibió una llamada telefónica de los agentes del servicio de inteligencia sirio, quienes lo convocaron a que se presentara en sus oficinas, situadas en el distrito de al-Hateeb de Damasco. Los días 26 y 27 de julio de 2009, el Sr. Al-Hassani fue sometido a sucesivas sesiones de interrogatorios.

6. El 30 de julio de 2009, el Sr. Al-Hassani fue acusado formalmente por la fiscalía de socavar el "prestigio" y los "sentimientos nacionales" del Estado con arreglo a los artículos 285, 286 y 287 del Código Penal de Siria. Posteriormente, en septiembre de 2009, fue acusado de "establecer vínculos ilícitos en el extranjero", con arreglo al artículo 275 del Código Penal de Siria. Según la información recibida, el Servicio General de Inteligencia de Siria adujo que el Sr. Al-Hassani había recibido ayuda financiera del Centro Al-Andalus, una organización egipcia de defensa de los derechos humanos financiada por el Fondo Nacional en favor de la Democracia, el cual, según el Servicio de Inteligencia, está bajo el control del Congreso de los Estados Unidos.

7. Según la información recibida, el Sr. Al-Hassani fue recluido en una pequeña celda en el ala 7 de la prisión de Adra, al noreste de Damasco, que tenía que compartir con otros 70 presos. Al parecer, fue obligado a dormir en el suelo y se le prohibió hablar con los demás reclusos.

8. El 28 de octubre de 2009 concluyó la instrucción, y el juez de instrucción dictó auto de procesamiento elevando la causa del Sr. Al-Hassani al Segundo Tribunal Penal de Damasco, acusándolo de "realizar actos destinados a socavar los sentimientos nacionales" (artículo 285 del Código Penal sirio), "difundir afirmaciones falsas o exageradas para socavar los sentimientos nacionales" (artículo 286 del Código Penal sirio), y "diseminar información falsa o exagerada en el extranjero para minar el prestigio del Estado o de su situación financiera" (art. 287). Los abogados del Sr. Al-Hassani recurrieron el auto de procesamiento. El 8 de febrero de 2010, el Tribunal de Apelación confirmó el procesamiento del Sr. Al-Hassani por los delitos antedichos.

9. Según la información recibida de la fuente, durante el juicio, las pruebas presentadas por el fiscal contra el Sr. Al-Hassani se limitaron a tres informes secretos del Servicio General de Inteligencia. Al parecer, no se permitió al Sr. Al-Hassani consultar estos informes, y el magistrado que presidía el tribunal no solicitó ninguna otra prueba al fiscal.

10. En su comparecencia ante el Segundo Tribunal Penal de Damasco el 18 de febrero de 2010, el Sr. Al-Hassani negó haber cometido delito alguno o haber recibido ayuda financiera y afirmó que los informes y artículos publicados por Sawasiyah eran verdaderos y fidedignos. El Sr. Al-Hassani y sus abogados presentaron pruebas de su inocencia y solicitaron la comparecencia de 11 testigos. Según se afirma, el Presidente del tribunal denegó la comparecencia de los testigos propuestos por el Sr. Al-Hassani e hizo caso omiso de las pruebas presentadas por la defensa. La fuente aduce que sus informaciones están corroboradas por observadores internacionales que viajaron a Damasco para seguir el juicio del Sr. Al-Hassani, entre ellos los de la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

11. El 27 de septiembre de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación desestimó el recurso interpuesto por los abogados de la defensa y confirmó la sentencia de 23 de junio de 2010.

12. Según la información recibida, el Sr. Al-Hassani ha estado desde entonces en riesgo permanente de sufrir abusos y malos tratos en la prisión de Adra. Al parecer, a finales de octubre de 2010, el Sr. Al-Hassani fue agredido por otro preso que acababa de ser trasladado a su misma celda. Este compañero de celda agredió al Sr. Al-Hassani sin que mediara palabra o conversación alguna entre ellos. Según las informaciones, el agresor gritó consignas nacionales mientras golpeaba al Sr. Al-Hassani con un instrumento de hierro afilado. Según la fuente, esto apunta a la complicidad de las autoridades de la prisión. Como resultado de ello, el Sr. Al-Hassani estuvo a punto de quedarse ciego debido a un profundo corte en la frente que precisó diez puntos de sutura y le provocó una grave cianosis en su ojo izquierdo. El Sr. Al-Hassani sigue recluso en la misma celda que su agresor.

13. Según la fuente, los cargos imputados al Sr. Al-Hassani son consecuencia directa de su labor a favor de los derechos humanos, en particular de la difusión de información sobre el Tribunal Supremo de Seguridad Estatal y de su participación en la divulgación del fallecimiento de un preso sirio que estaba en poder de las autoridades. El Sr. Al-Hassani había cuestionado las circunstancias del fallecimiento del preso, afirmando que había razones para creer que era consecuencia de torturas.

14. Según la fuente, al negarse a reconocer a Sawasiyah como una organización legítima y prohibir al Sr. Al-Hassani que viajara durante los cinco años anteriores a su detención, las autoridades sirias violaron el derecho del Sr. Al-Hassani a participar en organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

15. La fuente informa de que el Sr. Al-Hassani estuvo sujeto a una prohibición de viajar durante los cinco años anteriores a su detención, lo que, según la fuente, constituye una presunta violación del artículo 12, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos. Se informa además de que, tras la creación de Sawasiyah en 2004, las autoridades sirias amenazaron al Sr. Al-Hassani con emprender acciones judiciales contra él y encarcelarlo, e intervinieron sus correos electrónicos y sus llamadas telefónicas.

*Respuesta del Gobierno*

16. En la comunicación dirigida al Gobierno el 8 de abril de 2011, el Grupo de Trabajo manifestó que agradecería al Gobierno que, en su respuesta, facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Al-Hassani y especificara las disposiciones que justificaban su permanencia en prisión, aclarando en particular la conformidad de dichas disposiciones con los artículos 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se envió un recordatorio el 10 de junio de 2011.

17. La respuesta del Gobierno se recibió el 13 de julio de 2011. En ella el Gobierno reconoció que había recibido la carta del Grupo de Trabajo, y señaló que había proporcionado información detallada sobre el caso del Sr. Al-Hassani en sus notas verbales de 3 de noviembre de 2010 y 29 de julio de 2010.

18. En una comunicación de 4 de agosto de 2011, el Grupo de Trabajo formuló las siguientes precisiones a la respuesta del Gobierno. La nota verbal de 3 de noviembre de 2010 era la respuesta a una comunicación conjunta emitida el 6 de julio de 2010 por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Por su parte, la nota verbal de 29 de julio de 2010 era la respuesta a una comunicación conjunta emitida el 6 de julio de 2010 por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo añadió que el contenido de estas notas verbales se tendría en cuenta cuando se examinara el caso.

19. Tras examinar el caso y las informaciones proporcionadas por el Gobierno, el Grupo de Trabajo añade que la comunicación que dirigió al Gobierno el 8 de abril de 2011 contiene denuncias específicas a las que el Gobierno no ha respondido en sus dos notas verbales relativas al Sr. Al-Hassani, fechadas el 3 de noviembre de 2010 y el 29 de julio de 2010, respectivamente. De conformidad con el sistema de los diferentes órganos de tratados y procedimientos especiales, un gobierno puede ser contactado por una pluralidad de órganos acerca del trato dispensado a una persona y, en algunos casos, en más de una ocasión por cualquiera de ellos en relación con la misma persona.

20. El Grupo de Trabajo se remite al procedimiento de los llamamientos urgentes. Al igual que otros órganos de tratados y de procedimientos especiales, el Grupo de Trabajo ha desarrollado dicho procedimiento principalmente para los casos en que hay denuncias suficientemente fiables que indican que una persona puede estar detenida arbitrariamente y que las presuntas violaciones pueden requerir una intervención urgente por estar en juego vidas humanas, o situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o la perpetuación de un daño de mucha gravedad para las víctimas en caso de que continúe la detención. Al tratar dichas comunicaciones, el Grupo de Trabajo subraya que ningún llamamiento urgente basado en motivos humanitarios influye en modo alguno en la evaluación final del Grupo de Trabajo respecto de si la privación de libertad es o no arbitraria, salvo en los casos en que el Grupo de Trabajo haya determinado ya el carácter arbitrario de dicha privación de libertad.

21. El Gobierno añadió en su respuesta de 13 de julio de 2011 que el Sr. Al-Hassani fue condenado a tres años de prisión por violar la legislación siria. Se remite asimismo a la explicación proporcionada en las notas verbales de 3 de noviembre de 2010 y de 29 de julio

de 2010, así como a su propia respuesta de 23 de febrero de 2010 en contestación a un llamamiento urgente de los procedimientos especiales. En las notas verbales se explica que la prisión y la sentencia condenatoria no guardan relación con sus presuntas actividades en defensa de los derechos humanos, sino con la comisión de actos que constituyen delitos con arreglo a la legislación siria. El Gobierno añade que la responsabilidad de evaluar estos actos y de determinar si constituyen o no delitos corresponde al poder judicial sirio, que tiene la última palabra en el asunto y que tomará su decisión como institución firmemente establecida que garantiza a las partes litigantes un juicio justo ante tribunales imparciales que juzgan en diferentes instancias.

22. En su respuesta de 13 de julio de 2011, el Gobierno resaltó que Siria está experimentando en la actualidad importantes reformas políticas, económicas y sociales, incluido el levantamiento del estado de excepción, la eliminación del Tribunal Superior de Seguridad del Estado y la proclamación de una amnistía general para los delitos cometidos antes de la fecha de la amnistía, esto es, el 30 de mayo de 2011.

23. El Gobierno informó también al Grupo de Trabajo de que el Sr. Al-Hassani es actualmente un hombre libre en virtud de esa amnistía.

### **Deliberaciones**

24. En este caso, la primera pregunta que se plantea es si la privación de libertad es el resultado del ejercicio de los derechos y libertades contemplados en los artículos 19 (libertad de opinión y de expresión) y 20 (libertad de reunión y de asociación pacíficas) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 19 (libertad de opinión y de expresión), 21 (reunión pacífica, libertad de reunión y de asociación pacíficas) y 22 (derecho a asociarse) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. El Grupo de Trabajo se remite a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre la República Árabe Siria de 15 de septiembre de 2006, en las que el Comité manifestó su preocupación por "los obstáculos impuestos a la inscripción y el libre funcionamiento en el Estado Parte de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la intimidación, el hostigamiento y la detención de los defensores de los derechos humanos" (CCPR/CO/84/SYR, párr. 12). El Comité también pidió a Siria que adoptara "medidas urgentes para modificar todas las leyes que restrinjan las actividades de estas organizaciones, en particular la legislación relativa al estado de excepción, que no debe servir de excusa para impedir las actividades orientadas a la promoción y la protección de los derechos humanos. El Estado Parte debe velar por que su legislación y sus prácticas permitan que estas organizaciones operen libremente".

26. El Grupo de Trabajo también hace referencia a las preocupaciones expresadas en la comunicación conjunta emitida el 6 de julio de 2010 por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y en la comunicación conjunta emitida el 6 de julio de 2010 por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

27. El Grupo de Trabajo ha examinado la relación entre el encarcelamiento del Sr. Al-Hassani y su ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de asociación, particularmente en el marco de su labor como defensor de los derechos humanos. La fuente alega que el encarcelamiento es consecuencia directa de esa labor y que no tiene ninguna otra justificación. La respuesta del Gobierno es útil por cuanto en ella se indican las fechas, los aspectos formales del procedimiento penal y otras medidas relacionadas con el encarcelamiento del Sr. Al-Hassani. Sin embargo, estas cuestiones no

son objeto de discusión, y la respuesta no ofrece ninguna otra información que ayude a adoptar una decisión respecto de las denuncias formuladas por la fuente.

28. La fuente ha documentado la extensa labor que el Sr. Al-Hassani ha realizado como defensor de los derechos humanos. El Gobierno no ha rebatido los indicios razonables que apuntan a que la detención del Sr. Al-Hassani se debe al ejercicio de los derechos y libertades mencionados y a su labor como defensor de los derechos humanos. La enumeración de las sentencias y otras decisiones no es suficiente a este respecto. El Grupo de Trabajo necesita información que invalide directamente la denuncia de violación de los derechos humanos.

29. El Gobierno no ha rebatido los indicios razonables presentados, de forma que este Grupo de Trabajo no tiene otra alternativa que concluir que la detención del Sr. Al-Hassani se debe al ejercicio de los derechos y libertades enumerados en el párrafo 24 que antecede y a su labor como defensor de los derechos humanos, y que no hay razones que justifiquen la restricción de esos derechos. Por tanto, la privación arbitraria de libertad del Sr. Al-Hassani corresponde a la categoría II aplicable a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

30. Por otro lado, en el presente caso, el Grupo de Trabajo ha considerado que la violación de las normas internacionales pertinentes contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto del derecho a un juicio imparcial son de tal gravedad que confieren a la detención un carácter arbitrario. El Grupo de Trabajo examinó el contenido de la nota verbal del Gobierno, de fecha 3 de noviembre de 2010, a propósito del llamamiento urgente de los procedimientos especiales. En dicha nota verbal se señalaba que la defensa del Sr. Al-Hassani había solicitado la comparecencia de varias personas que testificaran la inexistencia de intención dolosa, y que el tribunal había rechazado esta petición aduciendo que solo el tribunal era competente para interpretar la intención dolosa. Asimismo se señalaba que las pruebas existentes contra el Sr. Al-Hassani constituían pruebas escritas vehementes de mala fe e intención dolosa, y que no requerían interpretación ni explicación. El Grupo de Trabajo no considera que la información proporcionada por el Gobierno sea suficiente para rebatir la presunción de violación del artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, la detención del Sr. Al-Hassani también corresponde a la categoría III aplicable a los casos presentados al Grupo de Trabajo.

31. El Gobierno ha informado al Grupo de Trabajo de que el Sr. Al-Hassani se ha beneficiado de amnistía. El Grupo de Trabajo entiende que ha sido o será puesto en libertad. Dado que el encarcelamiento del Sr. Al-Hassani constituye una violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el principal remedio es su inmediata puesta en libertad. Tan pronto como se ponga en libertad al Sr. Al-Hassani con arreglo a las informaciones proporcionadas por el Gobierno, el principal remedio restante es el reconocimiento de un derecho efectivo a obtener reparación de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las razones que pueden aducirse para la detención del Sr. Al-Hassani no pueden invocarse contra una demanda de reparación.

### **Decisión**

32. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Al-Hassani es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

33. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Árabe Siria que adopte las medidas necesarias para remediar la situación y, en particular, ofrezca al Sr. Al-Hassini una reparación adecuada tras su puesta en libertad.

[Aprobada el 30 de agosto de 2011.]

---